

EL TERREMOTO DEL 10 DE OCTUBRE Y LA RECONSTRUCCION NACIONAL

José Antonio Alvarado
Alfonso Goitia
René León

RESUMEN

El terremoto del 10 de octubre ha acontecido en medio de otra catástrofe nacional de carácter estructural producto del desarrollo del capitalismo. Los núcleos urbanos de pobreza, los mayormente afectados por el sismo, han sido y siguen siendo necesarios para mantener los salarios deprimidos y la reproducción del capital a bajo costo. En medio de estos núcleos de miseria y de una destructiva guerra aconteció el terremoto del 10 de octubre.

Ello obliga a plantearse la reconstrucción nacional no solamente en términos de reconstruir lo derruido, tal como lo quiere la empresa privada, sino a pensar en términos económicos, sociales y políticos mucho más amplios. Aquí se propone no aceptar la oferta de la empresa privada salvadoreña porque propone un modelo invalidado ya históricamente. Los autores de las siguientes páginas proponen, en cambio, pensar bien el tipo de reconstrucción nacional que se va a hacer, dar participación a los sectores populares en ella y buscar las fuentes de financiamiento adecuadas para ello.

Introducción

El terremoto del 10 de octubre vino a sumarse a la ya grave y compleja problemática nacional. La destrucción derivada del sismo y su mayor impacto sobre las mayorías marginadas, potencia la crisis económica, social y política. El costo estimado de daños oscila alrededor de 1.000 millones de dóla-

res, reflejado fundamentalmente en la destrucción de más de 60.000 viviendas habitadas mayormente por los marginados urbanos, y en los enormes daños en la infraestructura económica y social y en el aparato productivo privado.

El acelerado agotamiento de la economía, los retrasos y dificultades para conseguir financiamien-

Reconstruir lo derruido no es solución porque el agotamiento de los ejes dinamizadores y la dimensión de la crisis requieren de un modelo que suprima la injusticia estructural.

to externo en el monto y condiciones requeridas, la ausencia de medidas y planes adecuados para enfrentar situaciones de esta naturaleza y los claros intentos del gobierno y de la empresa privada para obtener ventajas políticas y económicas aprovechándose de la desgracia y el caos, dimensionan y complejizan el problema.

La situación se vuelve más dramática y desesperante en la medida que la dinámica de la crisis estructural pone en primer plano otros problemas y discusiones que concentran la atención y los recursos del país, postergando las urgentes necesidades de las víctimas del sismo. Ciertamente, después de 5 meses del desastre, quienes tuvieron suerte de conseguir un pedazo de tela o de plástico para protegerse del sol y la lluvia, continúan en las calles de San Salvador; la "ayuda de emergencia" terminó antes de reconstruir las fuentes de ingresos de las mayorías afectadas; aún más, el ripio continúa obstruyendo el paso en algunas vías de la capital, a pesar de haberse "gastado" 20 millones de colones en demolición y limpieza de escombros.

La experiencia del terremoto, constituye una muestra clara de que los alcances de un fenómeno de tal naturaleza se encuentran inmersos y condicionados por la realidad que vivimos; sus implicaciones y las alternativas para hacerle frente, exigen una reflexión a partir de esa realidad.

1. Antecedentes

No es casual que los efectos destructivos del terremoto cobraran mayor notoriedad en los sectores marginados del área metropolitana de San Salvador. El desarrollo del modo de producción capitalista en nuestro país se encargó de generar excedentes poblacionales y concentrarlos en "asentamientos populares," que no cuentan con los bienes y servicios básicos ni con las condiciones mínimas de seguridad para sus habitantes.

La incapacidad de la estructura agraria para absorber y mantener a la fuerza de trabajo agrícola, el escaso dinamismo del sector industrial como generador de empleo y el explosivo crecimiento demográfico, se reflejan en la constitución de grandes masas de fuerza de trabajo urbana desocupada y en la proliferación de "cinturones de pobreza" en mesones, tugurios, colonias ilegales y campamentos.

El grado de urbanización de El Salvador (medido por el porcentaje de la población total que habita en centros urbanos) pasó del 18 por ciento en 1950 al 44 por ciento en 1978; la población del área metropolitana de San Salvador (AMSS) aumentó de 238.000 habitantes en el primer año a 1.200.000 en el segundo. En 1976, el 47.4 por ciento de esas familias vivía en habitaciones "informales;" según datos oficiales, más del 45 por ciento de las viviendas del AMSS estaban construidas con bahareque y el 15 por ciento poseía techo de materiales no permanentes (cartón, paja o lámina). El 92.9 por ciento de todos los hogares cuyo ingreso familiar era menor de 299 colones mensuales, poseía una sola habitación, para una familia promedio de 5 miembros.¹

Todo esto es producto del desarrollo del capitalismo en El Salvador, es un problema estructural y juega un papel importante para la reproducción capitalista. Los núcleos urbanos de pobreza posibilitan mantener los salarios deprimidos y la reproducción del capital a bajo costo.

2. Efectos inmediatos

El terremoto no es un fenómeno aislado y que aparece en condiciones de funcionamiento económico social normal. Durante 1986, los efectos del sismo se sumaron a un programa de estabilización y reactivación económica implementado a principios de 1986 y cuyos efectos contraccionistas, inflacionistas y políticos, se habían manifestado a lo largo del año, acelerando la crisis; una sequía que a mediados del año afectó la producción de granos básicos, especialmente la de maíz, reduciéndola en un 30 por ciento del nivel proyectado; una reducción del área sembrada de algodón, y a la expansión del conflicto armado.

El terremoto, entonces, aparece en un momento de profunda crisis económica, social y política. Según fuentes oficiales, la tasa de desempleo abierto era de 32 por ciento en 1985, la cual aunada al subempleo ascendía al 60 por ciento; el déficit externo superaba los 1.000 millones de colones y el desequilibrio fiscal era de 744 millones de colones. La situación se agudizaba con una deuda externa de 2.000 millones de dólares y con una tasa de inflación esperada del 30 por ciento,



pero que ya en los días previos al sismo ascendía al 33 por ciento acumulado.²

En lo político-social, el movimiento popular había venido presionando por solucionar esta crisis por medio del diálogo. El sector privado se aprestaba a desencadenar una serie de acciones para frenar un impuesto en orden a financiar la guerra. En ese momento acació el terremoto.

Las estimaciones oficiales de los daños derivados del terremoto, dan cifras entre mil y 1.800 millones de dólares, de los cuales casi el 50 por ciento corresponde a infraestructura social básica (vivienda, educación y salud), más del 40 por ciento a infraestructura económica y reparación del aparato productivo privado dañado por el sismo; y el resto a ayuda de emergencia, demolición y limpieza de escombros. Se estima que una tercera parte de la población del AMSS, es decir, Más de 500.000 personas resultaron afectadas en diferentes grados; de éstas, alrededor de 300.000 perdieron totalmente sus viviendas o sufrieron daños de gran consideración.³

La mayor destrucción de viviendas derivada del terremoto se concentró en barrios y colonias po-

pulares (San Marcos, San Jacinto, Santa Anita, Terminal de Oriente, Ayutuxtepeque, etc.). En un estudio muestral realizado por el ministerio de planificación⁴ en las zonas afectadas por el sismo se encontró que el 42 por ciento de las viviendas destruidas eran de bahareque y el 7 por ciento de adobe y otros materiales; un 60 por ciento eran casa-apartamento y el 30 por ciento mesones y tugurios. Sólo el 35 por ciento de las viviendas eran propias. El costo estimado de daños en el 49 por ciento de las viviendas era inferior a 5.000 colones. Según estimaciones de la FUNDASAL,⁵ "para unas 56.000 familias, las pérdidas han sido totales o mayores, en tanto que se trata de viviendas sumamente precarias cuyo valor no pasa de los 15.000 colones y que, en una gran mayoría de casos, son lugares de trabajo también... (además), la infraestructura de carácter social con mayores daños es precisamente aquella dedicada a dar servicio a este sector."

Se calcula que unas 1.500 aulas escolares tendrían que ser rehabilitadas o reconstruidas en el sector público y que más de 150 centros fueron dañados total o parcialmente; por lo menos 6 edifi-

caciones deben ser rehabilitadas y 3 reconstruidas en la Universidad de El Salvador; 14 centros educativos privados deberán ser rehabilitados y por lo menos 10 reconstruidos. El 90 por ciento de la infraestructura hospitalaria de la capital habría sido dañada. Como resultado del terremoto, el desempleo abierto en el AMSS habría aumentado en un 10 por ciento; sólo en el sector informal se perdieron unos 40.000 empleos y 10 millones de colones en concepto de ingresos.

Así, pues, los sectores más afectados por el sismo son aquellos tradicionalmente marginados y desposeídos, sobre cuyas deterioradas condiciones de vida se ha sustentado la acumulación de capital, y que soportan el mayor peso de la guerra y de la profundización de la crisis.

3. Reflexiones en torno a la reconstrucción nacional

Pocos días después del terremoto comenzaron a plantearse los primeros argumentos y lineamientos para la reconstrucción, principalmente provenientes de las asociaciones empresariales del país. Los elementos básicos de la estrategia sugeridas, por ellas, parecen ser los siguientes: que el proceso debe ser comandado por la "libre empresa," que si bien se debe prestar ayuda de emergencia a las familias directamente afectadas por el sismo, la reconstrucción debe ser resultado de la "reactivación" económica; que el Estado debe crear las condiciones y estímulos necesarios para impulsar la reactivación y la reconstrucción fomentando la "iniciativa privada;" que los recursos propios y la ayuda internacional para hacerle frente a los daños del terremoto, sea canalizada y utilizada bajo los lineamientos de esta estrategia. Los aspectos "vitales" a definir en este momento, serían: "1) una menor injerencia del gobierno en la economía; 2) la conveniencia de una mayor libertad de precios en los mercados de bienes y factores productivos; 3) una revisión del sistema proteccionista y de la política de incentivos; 4) el establecimiento de prioridades en el fomento de formación y el uso eficaz del capital."⁶

Ciertamente, los planteamientos empresariales apuntan hacia un tipo de reconstrucción orientada por la lógica que ha regido tradicional-

mente el funcionamiento de nuestra economía y que ha generado y agudizado los desequilibrios estructurales y la acelerada marginación de las mayorías populares; condiciones que están en la base de la magnitud alcanzada por los efectos del terremoto y, principalmente, condicionan la dimensión de la crisis económica, social y política que enfrentamos. Los planteamientos empresariales enfocan los efectos del terremoto exclusivamente como resultado del fenómeno natural, aislado de la realidad histórica del país; de ahí que propongan, en el mejor de los casos, simplemente "reconstruir lo destruido" por el sismo, es decir, reproducir las condiciones que expanden los efectos de los fenómenos naturales y que son el principio de la crisis nacional.

La aparente aceptación de los planteamientos empresariales por parte del gobierno salvadoreño y norteamericano indicaría que, de llevarlos adelante, acarrearía ventajas, principalmente económicas para unos y políticas para los otros. La canalización de la ayuda y los estímulos al sector privado podrían paliar temporalmente los problemas de acumulación, vía ganancia inmediata, de la gran empresa privada. Al mismo tiempo, esto posibilitaría el acercamiento, y quizás un compromiso mayor, de los sectores empresariales con los objetivos fundamentales de la estrategia contrainsurgente.

Ciertamente, los planteamientos de estos sectores señalan una alternativa que históricamente ha mostrado su incapacidad para resolver la grave problemática nacional y que, en el plazo inmediato, estaría apuntado más bien a la necesidad de "aunar esfuerzos" para impulsar la ampliación y profundización de la guerra, objetivo que por sí mismo niega cualquier validez a los planteamientos de reconstrucción esgrimidos por estos sectores.

Desde nuestro punto de vista, la estrategia de reconstrucción requiere una reflexión a partir de nuestra realidad histórica, los efectos del terremoto y las alternativas para hacerle frente deben contemplarse inmersos y condicionados por esa realidad. En este sentido, la estrategia de reconstrucción requiere, al menos, de la definición de tres grandes componentes: el tipo o modalidad de reconstrucción requerida, la participación popular en el proceso y el financiamiento necesario para llevarlo adelante.

Los planteamientos empresariales apuntan hacia un tipo de reconstrucción orientada por la lógica que ha regido tradicionalmente el funcionamiento de nuestra economía.

3.1. La reconstrucción requerida

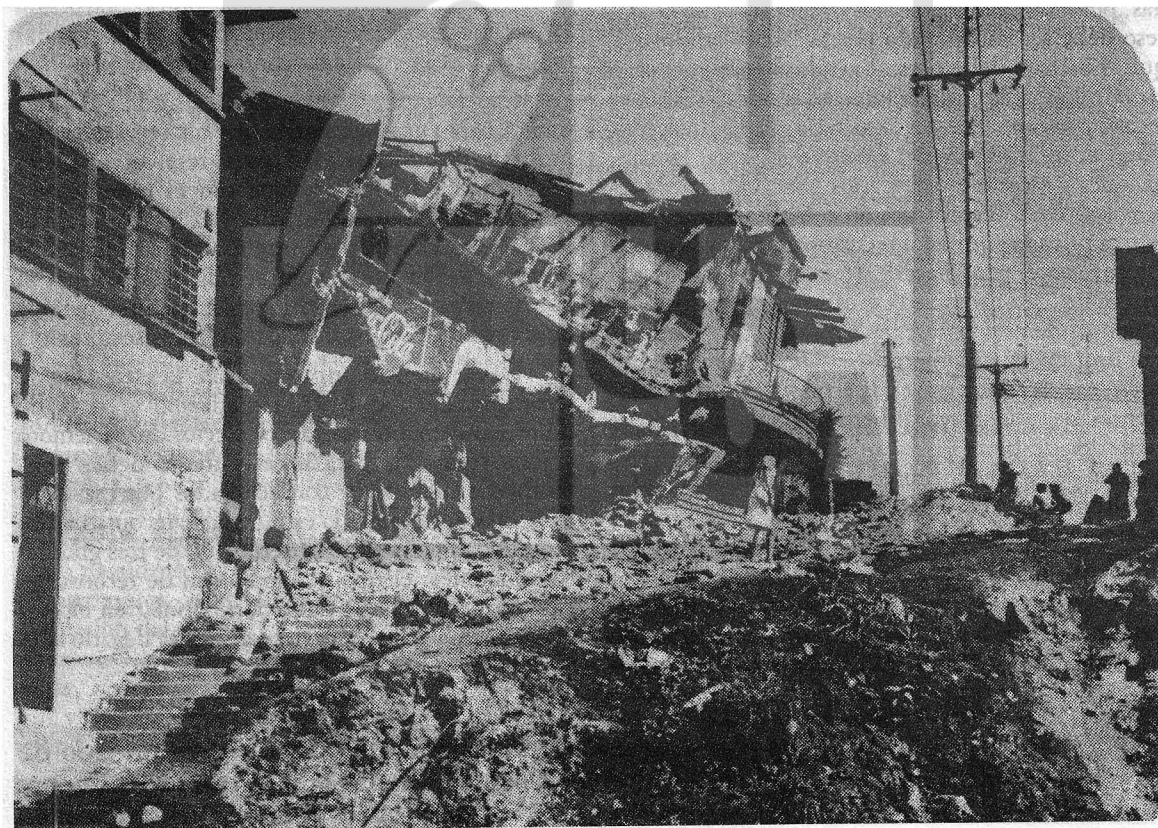
La reconstrucción debe tratar de minimizar o eliminar la condición que le imprimió un mayor potencial destructivo al terremoto, y que no es otra que la injusticia estructural resultado de la estructura de propiedad y de la lógica de funcionamiento del modelo actual.

Ciertamente, los objetivos, valores y tipo de organización de nuestra sociedad se han definido a partir de la estructura de propiedad; y desde el punto de vista del gran capital nacional, el modelo exportador garantizaba la mayor rentabilidad inmediata, a expensas de la creciente marginación de cada vez más amplios sectores de la población, asegurando la reproducción de esa estructura de propiedad. Sin embargo, los ejes dinamizadores de este modelo, la escasa demanda interna proveniente de los sectores donde se concentra el ingreso y, principalmente, la demanda de exportaciones, ofrecen muestras claras de su indudable agotamiento. Este modelo ha mostrado ya su incapacidad para resolver la grave problemática nacional, no sólo en cuanto a hacerle frente a las necesidades básicas po-

pulares, sino también en cuanto a posibilitar el proceso de reproducción del gran capital nacional.⁷

La incapacidad del modelo para solventar las necesidades básicas de la población, ha sido ya suficientemente evidenciada; baste señalar que, según datos oficiales de la CEPAL, para finales de los años setenta, es decir, en una década de considerables tasas de crecimiento económico, la mitad de la población salvadoreña no lograba ni siquiera satisfacer su canasta básica de alimentos, en otras palabras, vivía en estado de extrema pobreza, mientras el 70 por ciento del total vivía en estado de pobreza.⁸ En 1985, el 53 por ciento de la población del área metropolitana de San Salvador habitaba en "asentamientos populares," con un nivel de ingreso no mucho mayor que hace 8 años pero con un costo de la vida casi 3 veces más alto que el de entonces.⁹

En este contexto, el tipo de reconstrucción requerida adquiere dos características fundamentales que la definen. En primer lugar, es un proceso mucho más amplio y profundo que simplemente "reconstruir lo destruido." El agotamiento de los ejes dinamizadores y la dimensión de la crisis re-



quieren de un modelo que funcione para eliminar la injusticia estructural. Nosotros creemos que debe caracterizarse por un "volcarse hacia adentro consciente y planeado, pero no con una estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones que de suyo ya mostró sus propios límites, sino con una estrategia de desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de los sectores populares."¹⁰

En segundo lugar, la reconstrucción trasciende a los sectores directamente afectados por el terremoto, sus alcances son mucho mayores, se trata, ciertamente, de un proceso de reconstrucción integral y nacional; y sólo en la medida que la reconstrucción de los daños derivados del terremoto se enmarque dentro de este proceso más global, podrá constituir una respuesta verdadera a las necesidades de las familias afectadas por el sismo.

Además, este tipo de reconstrucción no es compatible con la estrategia de guerra; por el contrario, requiere como condición indispensable y urgente la finalización del conflicto, cuyo financiamiento absorbe la mayor parte de los recursos de la nación y acelera la destrucción del país, imposibilitando cualquier intento de reconstrucción. Es indispensable la reorientación de los recursos del país hacia los esfuerzos de reconstrucción.

Si bien el tipo reconstrucción propuesto requiere de medidas y cambios de más largo plazo, es posible plantear algunas acciones de corto plazo para las familias afectadas por el sismo que, además, podrían señalar el orden de prioridades y posibilidades del proceso de reconstrucción, que abran el camino para la consecución de los objetivos últimos del proceso. Ciertamente, aunque no son los únicos que lo necesitan, habría que hacerle frente inmediatamente a las necesidades de los sectores populares afectados por el sismo; en esta tarea hay que considerar que la etapa de ayuda de emergencia, concebida como la provisión de los bienes y servicios básicos a la población afectada, puede extenderse por varios meses si tenemos en cuenta que la mayoría de estas familias han perdido "todo," incluido sus fuentes de ingresos. Para la reconstrucción de las viviendas, obviamente, habría que definir el tipo de construcción y localización adecuada, que brinde seguridad y dignidad a sus habitantes, hay que considerar los costos y accesibilidad económica de las familias y los mecanismos de financiamiento; en este sentido, también habría que vigilar los alquileres y precios de las viviendas, a fin de evitar que constructores y casatenientes hagan "negocio" del terremoto; es indispensable una reforma urbana adecuada. Asimismo, es urgente la

reconstrucción de la infraestructura social dañada. Pero sobre todo es necesario poner en marcha medidas de emergencia para que las familias afectadas recuperen sus fuentes de ingreso.

Si bien es necesario reparar el aparato productivo y comercial afectado por el terremoto, no debe concebirse esto como el "motor" de la reconstrucción de cuya expansión se derivaría el bienestar para las familias afectadas.

Llevar adelante un proceso de reconstrucción nacional requiere, al menos, dos condiciones: una, la finalización del conflicto, y la otra, la urgente y efectiva participación de los sectores populares en el proceso de reconstrucción.

3.2. La participación popular

La dimensión y trascendencia del proceso de reconstrucción requiere la participación de todos los sectores nacionales con voluntad de contribuir a eliminar las condiciones que potencian los efectos de los fenómenos naturales y que están en la base de la crisis económica, social y política que, de manera continuada, amplia y profunda, ocasiona mayores víctimas y desastres que el sismo del 10 de octubre. Es decir, se trata de un verdadero y gran esfuerzo nacional para crear las condiciones que viabilicen la existencia de la sociedad salvadoreña.

La magnitud y naturaleza del reordenamiento requerido para la reconstrucción y la superación de sus obstáculos inmediatos, la guerra principalmente, requiere la participación de agentes sociales con verdadera voluntad y capacidad de llevarla adelante. La definición de estos agentes sociales no obedece a criterios voluntaristas, sino a elementos objetivos emanados de la realidad histórica del país. Uno de los agentes principales para impulsar la reconstrucción nacional lo constituyen los sectores populares, que han soportado secularmente la irracionalidad del sistema y de la guerra, que sufren la marginación y pobreza.

Si bien la empresa privada puede y debe jugar un papel importante en la reconstrucción, ésta no debe subordinarse al "mercado" y a su lógica de funcionamiento que se traduce en la maximización de la ganancia inmediata y la marginación social.

Para superar los obstáculos y hacer avanzar la reconstrucción nacional se requiere contar con la suficiente fuerza, creatividad y verdadero espíritu de independencia nacional, verdadera voluntad de rescatar el derecho a decidir nuestra propia vida como nación. Además, una salida realista y racional a

Si bien la empresa privada puede y debe jugar un papel importante en la reconstrucción, ésta no debe subordinarse al "mercado" y a su lógica de funcionamiento.

la crisis nacional es, sin duda, aquella que apunta hacia la satisfacción y atención prioritaria de las necesidades de las mayorías desposeídas de nuestro país.

3.3. El financiamiento de la reconstrucción

La modalidad de reconstrucción requerida, integral y de carácter nacional, exige la reorientación de todos los recursos y capacidades de la nación prioritariamente hacia los esfuerzos de reconstrucción; requiere medidas de carácter coyuntural y estructural. Dentro del primer tipo, la finalización de la guerra es urgente; dentro del segundo, la readecuación de los criterios de asignación de recursos en función del desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de la población, resulta indispensable.

La manera como se enfrente el problema del financiamiento de los daños derivados del terremoto, podría dar pistas del orden de prioridades y margen de viabilidad de la estrategia de reconstrucción requerida. Ciertamente, el terremoto no sólo ofrece la oportunidad de iniciar la reconstrucción, más bien vuelve más urgente su necesidad.

Si bien los recursos necesarios para la reconstrucción de la capital son, relativamente, menores que los requeridos para la reconstrucción nacional, dado su monto y la aguda crisis y estrangulamientos financieros del país, requiere no sólo la urgente necesidad de terminar con la guerra, sino también la implementación, desde ya, de medidas estructurales que posibiliten nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento, justos y no inflacionarios.

La mayor parte de los daños son en concepto de vivienda, infraestructura básica y fuentes de trabajo, es decir, son elementos que requieren urgente reconstrucción. Alcanzar el monto y composición de los recursos requeridos se enfrenta a límites estructurales difíciles de superar. En este sentido, el problema del financiamiento requiere, al menos, abordar tres aspectos: el o los agentes responsables de contratar los recursos en el monto y composición requeridos, las fuentes alternativas de financiamiento y la capacidad de pago de los sectores directamente beneficiados por la reconstrucción.

Las estimaciones más conservadoras de los daños del terremoto, sitúan el costo neto de posición

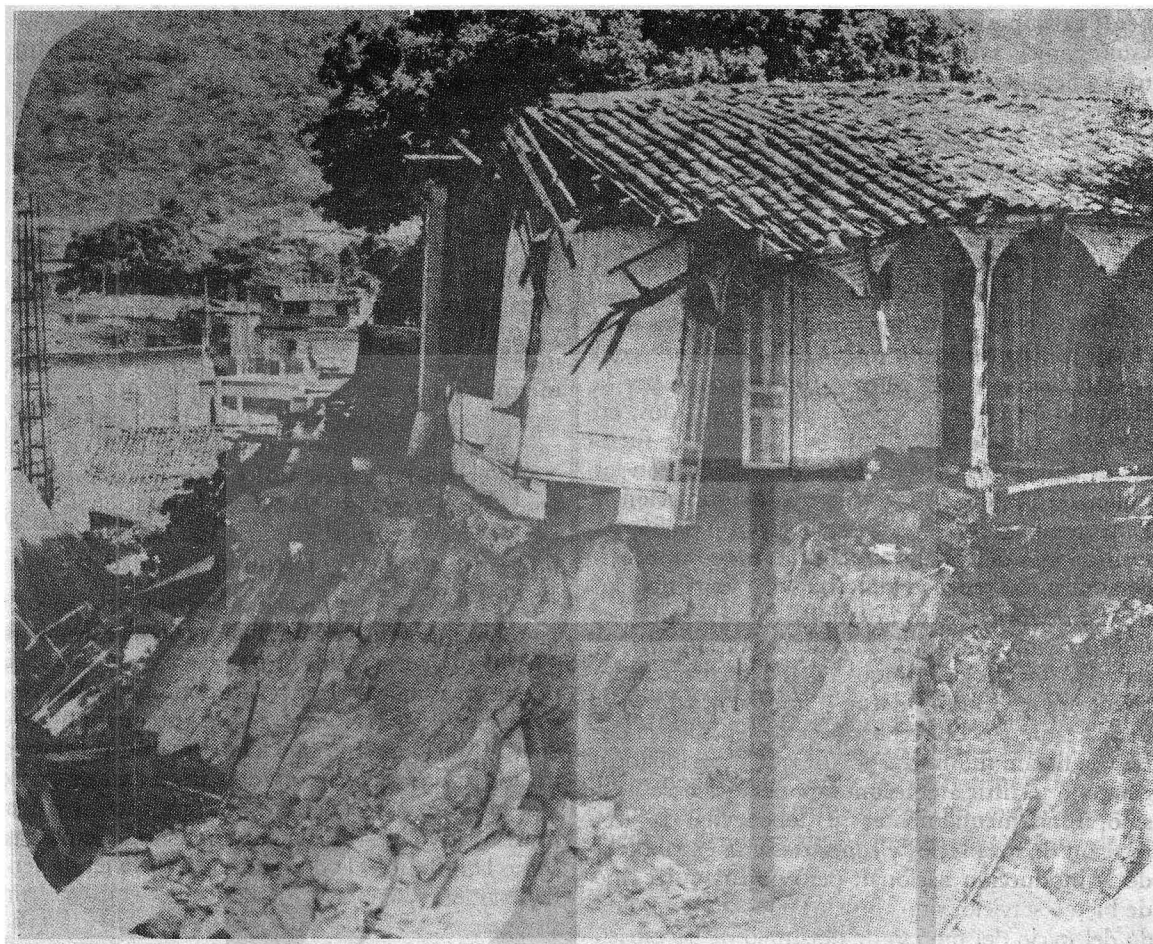
de éstos en alrededor de 900 millones de dólares. El monto de estos recursos equivale a casi la mitad de nuestra deuda externa y recurrir a este tipo de financiamiento significaría dedicar alrededor del 70 por ciento de las divisas provenientes de nuestras exportaciones al servicio de esa deuda.

La composición de los recursos requeridos es también problemática. Dado que de lo que se trata fundamentalmente es de la reconstrucción física de la capital, habría que considerar la capacidad, los requerimientos y el origen de los insumos del sector construcción; ya se estima que, en el mediano plazo, las necesidades de construcción superarán la capacidad de respuesta de este sector del aparato productivo nacional.

Analizando el origen de los insumos del sector construcción, encontramos que el 34 por ciento de éstos son importados (directa o indirectamente). Aún más, es precisamente el subsector vivienda el que presenta mayores requerimientos de insumos importados, alcanzando la proporción del 55 por ciento;¹¹ mientras la reconstrucción de viviendas representa un 60 por ciento del costo de reposición de la infraestructura social dañada por el terremoto. Esta composición de insumos señala límites adicionales para la obtención de recursos y el agudizamiento de los desequilibrios estructurales; estimaciones oficiales señalan que para los próximos dos años los requerimientos de importaciones representarán más del 80 por ciento del déficit en cuenta corriente previsto para 1986.

La responsabilidad de contratar los recursos necesarios para la reconstrucción de la infraestructura económica y social y los gastos de emergencia y rehabilitación inmediata, recae fundamentalmente sobre el Estado; éste es el único agente interno con la capacidad necesaria y accesibilidad a las fuentes de financiamiento.

Las estimaciones más conservadoras sitúan el costo de reposición atribuible directamente al Estado (excluyendo vivienda y daños del aparato productivo privado) en una cifra cercana a los 1.400 millones de colones, que ya para 1986 significaría un incremento del 25 por ciento en el déficit fiscal programado para este año y de más del 60 por ciento para los próximos 2 años; mientras que las pérdidas de producción e ingresos derivados del terremoto se reflejarán en una contracción de los ingresos



tributarios. A todo esto se agregarían los mayores requerimientos de gasto público derivados de la aceleración del proceso inflacionario (hay que tener en cuenta que los costos de reconstrucción se han estimado a los precios vigentes en 1986); ya se habla de una inflación cercana al 45 por ciento para finales de este año y de más del 70 por ciento para el próximo.

Si ya en los últimos años el presupuesto público ha venido enfrentando serias dificultades, éstas se agudizarán en los próximos, volviéndose más urgente la búsqueda de nuevas fuentes no inflacionarias de financiamiento principalmente de carácter interno, que además de liberar del uso privado el monto de recursos requeridos, éstos provengan de aquellos sectores y agentes sociales cuya contribución no signifique un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares; es decir, se debe tratar de comenzar a revertir el patrón regresivo de financiamiento público.

Los urgentes requerimientos financieros por parte del Estado para hacer frente a la reconstrucción vuelven a confirmar la necesidad de dos de las condiciones antes señaladas: la finalización de la guerra mediante una salida política y que el sector empresarial privado no sea el encargado de comandar el proceso de reconstrucción. Respecto a esto último, otorgarle la batuta del proceso a la empresa privada significaría acrecentar el ya elevado sacrificio fiscal demandado para "incentivar" la "libre iniciativa;" aspectos que ya han sido planteados y exigidos por las asociaciones empresariales y sus institutos técnicos.

Las fuentes alternativas de financiamiento (internas y/o externas) vienen en parte condicionadas por el monto y, principalmente, por la composición de los recursos requeridos (insumos nacionales o importados). Ciertamente, el monto de recursos trasciende la capacidad de la economía interna, dado el acelerado agotamiento del que ha sido objeto;

pero la composición de los recursos viene a señalar límites adicionales a la capacidad de financiamiento. Ya hemos señalado que, según estimaciones oficiales, en los próximos años se requerirá, al menos, un 80 por ciento más de recursos externos que los necesarios para mantener el déficit a los niveles prevalecientes en 1986; esto, aunado a los estrangulamientos del sector externo, anuncia el agudizamiento de los desequilibrios estructurales hasta niveles realmente insostenibles.

En el corto y mediano plazo, los recursos para cubrir la reconstrucción de los daños derivados del terremoto están fuertemente condicionado por la composición de los recursos físicos requeridos; en este sentido es indispensable la búsqueda de fuentes de financiamiento externo compatibles con los esfuerzos e intereses de la reconstrucción nacional. Pero también, teniendo en cuenta las fuertes restricciones del financiamiento externo, se deben desarrollar con seriedad y profundidad las posibilidades de financiamiento interno. En este sentido, es indispensable una reforma tributaria progresiva y la redefinición de los criterios para la asignación del crédito y del ahorro interno y externo, en función de los esfuerzos de reconstrucción. No sólo se deben tratar de minimizar los riesgos inflacionarios, evitando recurrir a emisiones monetarias excesivas, sino, fundamentalmente, se debe evitar la aceleración de los precios y contrarrestarla expandiendo la producción nacional; pero no cualquier tipo de bien o servicio, sino aquellos que, como resultado del inicio del proceso de desarrollo de las capacidades productivas y adquisitivas de los sectores populares, tiendan precisamente a satisfacer las necesidades de esas mayorías.

El tratamiento de la capacidad de pago de los sectores directamente beneficiados por la reconstrucción se vuelve sumamente complejo en el caso de las viviendas, la infraestructura social y material y herramientas de los pequeños y "micro" empresarios.

Según estimaciones oficiales,¹² el costo estimado de reposición de viviendas a los precios actuales es de 1.185 millones de colones (237 millones de dólares), considerando un costo unitario de 38.876 colones por vivienda destruida y 10.000 colones por vivienda semidestruída. Se estima que

más de 40.000 familias no podrán enfrentar los gastos de reconstrucción de sus viviendas.

El problema se agrava si consideramos que muchos comercios y talleres del sector informal van unidos a sus viviendas y que éste ha sido uno de los estratos más afectados.

Si a lo anterior aunamos el hecho que gran parte de la infraestructura social destruida es la orientada a los sectores más pobres de la capital (sólo para reconstruir los hospitales, unidades de salud y escuelas públicas dañadas se requieren más de 600 millones de colones) y que la población del área metropolitana de San Salvador presenta tasas de crecimiento elevadas (entre 1971-1980, esta población aumentó un 60 por ciento y de 1980 a 1985 creció en un 80 por ciento) y que, además, desde antes del terremoto el déficit habitacional y de infraestructura afectaba a unas 100.000 familias, el problema adquiere dimensiones verdaderamente catastróficas.

La amortización de una vivienda de unos 35.000 colones, a 20 años de plazo y con una tasa de interés del 6 por ciento, requeriría cuotas mensuales de alrededor de 250 colones, lo que constituye un "lujo" que no pueden darse la mayor parte de las familias de bajos ingresos afectadas por el sismo; más aún si consideramos que estos costos serían mucho mayores si se toman en cuenta elementos como la inflación, la dotación de una vivienda verdaderamente segura y digna que podría requerir sistemas de construcción antisísmicos y/o relocalizar las viviendas.

Lo anterior refleja claramente la estrecha vinculación entre acceso a la vivienda y el ingreso familiar. El problema de vivienda no podrá resolverse si no se resuelve el problema del ingreso, y para esto evidentemente no basta con "crear 40.000 empleos" a los niveles de salarios existentes, que no representan más de 500 colones mensuales y que no basta ni siquiera para satisfacer la fundamental necesidad de alimentación, ni mucho menos para destinar 250 colones al pago de vivienda. Esto viene nuevamente a confirmar la necesidad de los cambios estructurales y la redefinición de la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad.

Ciertamente, el problema de la vivienda e ingresos de los sectores populares es sumamente

Es indispensable una reforma tributaria progresiva y la redefinición de los criterios para la asignación del crédito y del ahorro interno y externo, en función de los esfuerzos de reconstrucción.

complejo y requiere medidas de mediano y más largo plazo. Pero algo podría hacerse desde ahora, por ejemplo, atender prioritariamente a la recuperación de los ingresos, bienes y servicios públicos de los sectores más necesitados, impedir los desalojos de las familias y/o reasentarlas en lugares adecuados y seguros, asegurar la transferencia de la propiedad de los predios a sus habitantes en condiciones accesibles, facilitar materiales y herramientas de construcción a precios bajos, reorientar y hacer accesible el crédito para reconstrucción de viviendas populares y recuperación de materiales y herramientas de los pequeños y micro empresarios, etc. Sobre todo es indispensable avanzar ya en la organización y participación popular y en la solución política del conflicto.

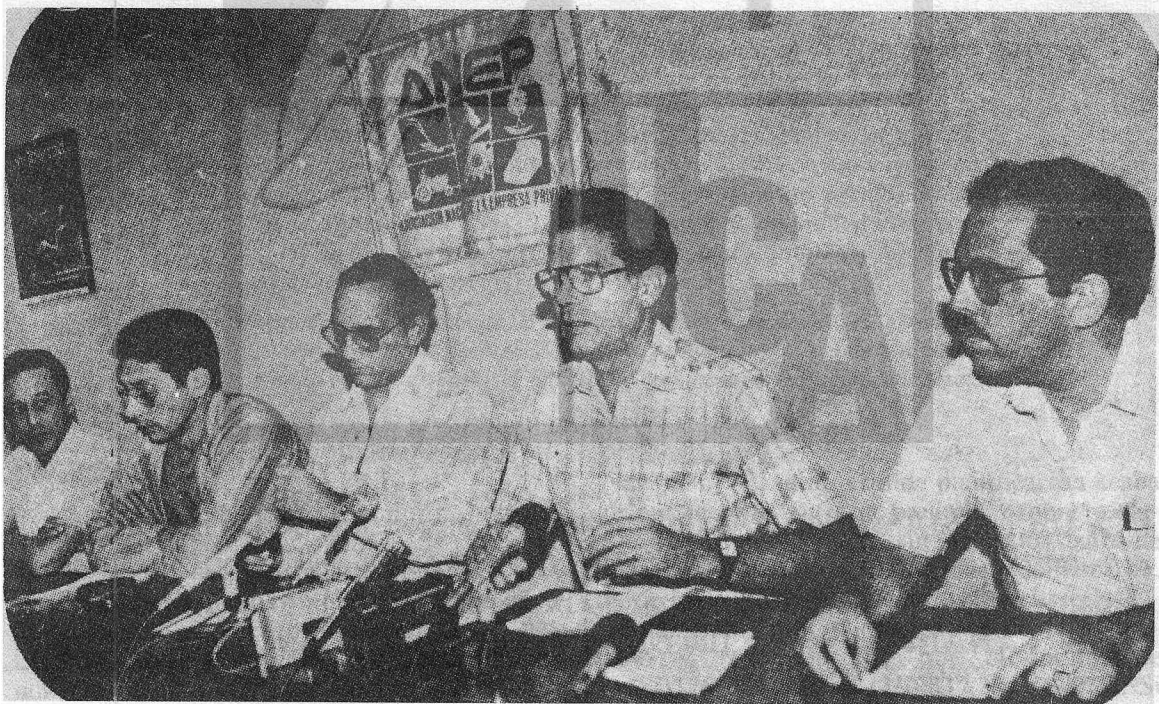
4. Reflexiones finales

Lo antes expuesto pone de manifiesto la gravedad de la problemática nacional presente y su agudización futura como resultado del terremoto, amén de la dinámica de los demás aspectos de la crisis salvadoreña. Como son los sectores marginados y desposeídos los mayormente afectados por la profundización de la crisis y como deben jugar un papel importante en el proceso de reconstrucción, conviene finalizar este ensayo señalando 4 grandes retos que enfrentan estos sectores.

Si ya antes del 10 de octubre la gravedad de la crisis económica, social y política había puesto en primer plano la necesidad de terminar con la guerra, la situación actual aclama a gritos la urgencia del diálogo y la paz; y ésto podría convertirse en realidad mediante la decidida participación y movilización popular.

El problema de la reconstrucción no es sólo un asunto técnico que se pueda resolver nada más definiendo tipos de construcción, localización o mecanismos de financiamiento; la reconstrucción es sobre todo un problema de lógica de funcionamiento del sistema, de valores, objetivos y prioridades, es un problema económico, social y político. En ese sentido, es totalmente indispensable la participación mayoritaria de los sectores populares afectados por el terremoto en torno a la formulación e implementación de las políticas de reconstrucción.

Las mayorías populares deben participar en la discusión de las formas y mecanismos de financiamiento de la reconstrucción; que éstas no empeñen aún más nuestra soberanía nacional, que no se traduzcan en excesivas presiones inflacionarias o hagan más regresivo el financiamiento público. En fin, se debe procurar que los mecanismos de financiamiento no se traduzcan en un mayor sometimiento y deterioro de las condiciones de vida de la



generación presente, ni mucho menos de las generaciones futuras.

La experiencia del terremoto, de sus efectos, de las condiciones que los expandieron y los retos de la reconstrucción, constituyen un elemento adicional que pone nuevamente en evidencia la irracionalidad e injusticia del modelo actual y la necesidad de reordenar la economía y la sociedad salvadoreña, de redefinirla en función de los sectores más humildes de este país.

NOTAS

1. Véase René León, "A propósito del terremoto: una visión panorámica de la situación habitacional en el área metropolitana de San Salvador," en *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1986, 6.
2. Véase Alfonso Goitia, "Impacto socioeconómico del terremoto," en *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1986, 6.
3. Véase José Antonio Alvarado. "Lineamientos generales para una estrategia de reconstrucción," en *Boletín de Ciencias Económicas y Sociales*, 1986, 6.
4. MIPLAN "Evaluación de daños causados por el terremoto del 10 de octubre," 22 de octubre de 1986.
5. FUNDASAL, "Después de la emergencia: necesidad de una política de vivienda popular a mediano y largo plazo," *La Prensa Gráfica*, 8 de noviembre de 1986, págs. 28 y 29.
6. FUSADES, *Boletín económico y social*, 1986, 16, pág. 5.
7. Departamento de Economía, "Dinámica y crisis de la economía salvadoreña," *ECA*, 1986, 447-448.
8. Departamento de Economía, "Crisis, diálogo y autodeterminación. Lineamientos de un modelo alternativo para El Salvador," *ECA*, 1986, 454-455.
9. J.A. Alvarado, *op. cit.*
10. Departamento de Economía. "Crisis, diálogo y autodeterminación. Lineamientos de un modelo alternativo para El Salvador," en *op. cit.*
11. L. Corleto y Palma R. "Articulación construcción-industria-sector externo," (adelanto de tesis), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".
12. MIPLAN, *op. cit.*

